

los derechos del oficio que administra.—Resultando: que el Tasador de costas de los Juzgados de la Habana pretende se disponga, que debe continuar percibiendo sus derechos en la cantidad que fijaban los antiguos Aranceles toda vez que en los vigentes no se les señalan especialmente, y además, que se haga igual declaración respecto del Contador judicial y de los Fiscales municipales en los juicios que se tramitan en los Juzgados de primera Instancia con su intervención, por no mencionarse los derechos que devengan.—Resultando: que el Tribunal pleno de dicha Audiencia, de conformidad con el Ministerio fiscal, intereso la conveniencia de que se disponga que las costas de los juicios de testamentaria y ab-intestato no puedan exceder de la décima parte del caudal hereditario, á fin de evitar el que se inviertan todas ó la mayor parte de los bienes en su pago.—Resultando: que V. E. consulta acerca de la omisión observada en los Aranceles, respecto del Intérprete del Gobierno General y proponiendo en definitiva, se adopte la oportuna resolución á fin de que aquel Centro no se vea privado de dicho funcionario.—Resultando: que el Escribano de Cámara de la Audiencia de Manila, Don Juan Arce, elevó instancia en solicitud de autorización para continuar percibiendo en metálico, los derechos que el Arancel señala á los de su clase, entendiéndole comprendido en la excepción que á favor de los funcionarios que sirvan cargos á título de dueños de oficios enagenados, se hace en el artículo 362.—Y considerando: que ni la Real orden de 15 de Abril de 1891 ni ningún otro precepto vigente, privan al Gobierno de introducir en los Aranceles las modificaciones que estime convenientes, ni con ellas se han desconocido en modo alguno, los derechos adquiridos por los Procuradores de la Audiencia de la Habana, supuesto que la Real orden citada se refiere al derecho de aquellos para actuar en dicho Tribunal con exclusión de los demás Procuradores de los Juzgados.—Considerando: que es inadmisibles la pretensión de los mencionados Procuradores en solicitud de que quede en suspenso el título IV del Arancel vigente ó que se aumenten los derechos de agencia, por encontrarse en condiciones distintas de las en que se hallan los Procuradores de los Juzgados, pues como ya se tuvo en cuenta en el expediente instruido para la publicación de dichos Aranceles, no se estimó conveniente ni justificada la diferencia de derechos para unas mismas diligencias, según que éstas tengan lugar en primera instancia ó en la Audiencia, por que los Procuradores no son auxiliares ni funcionarios de la Administración de justicia, sino meros representantes de las partes que litigan, y por tanto, sus retribuciones no deben guardar relación mas que con la naturaleza del acto que ejecuten, sin consideración alguna al Tribunal ante quien se verifican, dado que el trabajo de la extensión y presentación de un escrito la misma importancia tiene é iguales molestias ocasiona, cuando haya de presentarse en un Juzgado de primera Instancia ó en un Tribunal superior.—Considerando: que tampoco procede aumentar los derechos de agencia pretendidos por dichos Procuradores, por la necesidad que existe de armonizar las retribuciones con la economía de los litigantes para que éstos no se alejen de los Tribunales, abandonando quizás, sus derechos por temor á los gastos del juicio.—Considerando: que mientras no se dote á las Secretarías de Sala de la Audiencia de la Habana del personal indispensable de auxiliares y escribientes y del crédito para los demás gastos necesarios en ellas, no puede menos de continuar en su fuerza y vigor la Real orden de 28 de Junio de 1892, toda vez que subsisten los mismos motivos que obligaron á dictarla.—Considerando: en cuanto á la instancia del Tasador-Repartidor de la Audiencia de la Habana, que no se han desconocido sus derechos en los actuales Aranceles y que, por el contrario, continuará practicando su oficio en los términos establecidos por el artículo 421 de la Ley de Enjuiciamiento civil de las Antillas y demás disposiciones vigentes, y que se han fijado sus derechos en armonía con lo establecido en la Península y en la misma proporción de real fuerte por real de plata que se tuvo en cuenta para los demás funcionarios sujetos al Arancel.—Considerando: que no es de estimar tampoco, la instancia de Don Oscar Ortiz y López, Tasador de costas de los Juzgados de la Habana, en la que se queja de que los actuales Aranceles aumentan notablemente su trabajo y disminuyen en cambio, sus emolumentos, y solicita que, supuesto que no se le señalan especialmente los derechos correspondientes, se declare que puede seguir percibiendo la cantidad que determinan los antiguos, por que su labor es igual, á la de los que prestan el mismo servicio en los demás Juzgados de Ultramar y la Península y por que los artículos 73 y 130 de los Aranceles vigentes fijan los derechos que pueden llevar los escribanos por el citado servicio donde no le practican los tasadores por oficio enagenado, con arreglo al artículo 421 de la Ley de Enjuiciamiento civil de las Antillas.—Considerando: que del mismo modo puede decirse en cuanto á los derechos de los Contadores judiciales, por las operaciones divisorias del caudal hereditario en los juicios de testamentaria que practiquen al tenor de lo dispuesto en el artículo 1069 de la Ley de Enjuiciamiento civil citada, por que los citados artículos 73 y 130 de los Aranceles vigentes, no solo fijan los derechos que se pueden llevar por la tasación de costas y sus prorrateros, sino por la comprobación de cuentas y la liquidación y su extensión en autos y que en tales conceptos caben perfectamente,

los servicios que pueden prestar dichos Contadores, pues no es mas expresivo en su redacción el artículo 217 de los Aranceles antiguos de 1863, cuya subsistencia á favor de los mismos se propone.—Considerando: que la Real orden de 25 de Febrero de 1891 declaró á los Fiscales municipales letrados que, en aquellos puntos donde no existan Delegados especiales del Ministerio fiscal, desempeñen las funciones de los extinguidos Promotores en los Juzgados de primera Instancia, con derecho á percibir los emolumentos señalados á los últimos en el Arancel de costas procesales de 14 de Julio de 1863, y que es justo acordar emolumentos para dichos funcionarios, mientras no varíe la actual organización de los Tribunales en las Antillas.—Considerando: que la propuesta hecha por el Pleno de la Audiencia de la Habana para que se adicionen los Aranceles vigentes, declarando que en los juicios de testamentaria y ab-intestato las costas devengadas no podrán exceder de la décima parte del caudal descansa en lo que estatuyeron el Real Decreto de 10 de Febrero de 1854, los artículos 427 y 432 de los Aranceles aprobados por Real orden de 14 de Julio de 1863 y lo declarado por las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de Noviembre de 1875 y 26 de Marzo de 1889, y en la conveniencia de evitar que se invierta una gran parte ó el total de los bienes en el pago de las costas con mengua del prestigio de la Administración de Justicia.—Considerando: que el Real Decreto citado de 10 de Febrero de 1854 y el artículo 427 de los Aranceles de 1863 y la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Marzo de 1889 que concuerdan con las disposiciones de aquél, se refieren á las testamentarias y ab-intestatos de que conocieron antiguamente los Juzgados generales de bienes de difuntos, creados para proteger los intereses de los ausentes cuando la escasez del personal de justicia y la dificultad de comunicaciones lo requirieran, pero que ya no tienen aplicación por que devuelto á la jurisdicción ordinaria el conocimiento de dichos negocios proceden en ellos los Juzgados correspondientes conforme á las disposiciones del derecho común, según lo resolvió ya para el Archipiélago filipino el Real Decreto de 22 de Junio de 1883 y lo determinan las Leyes de Enjuiciamiento civil de Ultramar.—Considerando: que el mismo artículo 432 de los Aranceles de 1863, citado tambien por la Audiencia, y apoyo principal de su propuesta, que limitó efectivamente las costas de los negocios aludidos á la décima parte de cada hijuela, para que nunca excediera del 10 por 100 de la herencia líquida, exceptuaba de dicha limitación las costas que se devengasen en las apelaciones y en los incidentes, mandando que se satisficieran por los que en ellas tomaran parte, de la manera que resolviese la sentencia que cause ejecutoria.—Considerando: que el propósito noble y por todo extremo laudable, en que se ha inspirado la Audiencia de la Habana para formular su petición y lograr en los gastos de los juicios de testamentaria, una economía moderada mientras sea dable llegar al término de la justicia gratuita, apetecida en todos los tiempos, no cabe desconocer que actualmente es imposible que tenga otro alcance que el de una aspiración justa y prudente aun recomendada como lo fué siempre por la ciencia y por el interés mas alto de la sociedad, porque no teniendo otro objeto estos Aranceles que la retribución de servicios dentro de las prescripciones legales vigentes, no es la oportunidad de modificar aquellos para el caso de las testamentarias, y de hacerlo por los procedimientos que la Constitución de la Monarquía tiene establecidos, habría que llevar la misma retribución en los gastos á todos los demás pleitos, cuestiones é incidentes de carácter judicial; ni hay tampoco términos hábiles de hacerlo en este momento, abarcando como habría de abarcar necesariamente, la reforma un factor tan importante como el de los honorarios de los Letrados, etc., cuya reducción autorizan las Leyes de Enjuiciamiento civil (artículo 37), en ocasión tan determinada como la de que venciere en el pleito aquél á quien se hubiere otorgado la defensa por pobre y eso solo para el caso de que no viniere á mejor fortuna, y un elemento tan capital como el papel sellado; que rigiéndose por leyes especiales, guarde relación inmediata con las dificultades económicas que rodean por desgracia, á los Tesoros de las provincias de Ultramar, no menores que al de la Península.—Considerando que además contra los excesos que puedan cometerse en la fijación de los derechos y honorarios, existen recursos bien definidos para su impugnación, como lo demuestran los artículos 423 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil vigente en las Antillas y sus concordantes de la de Filipinas y los 352, 355, 358 y 359 de los Aranceles actualmente en vigor.—Considerando que el no haber comprendido en los Aranceles de que se trata, á los Intérpretes, no es razón para que se prive de derechos á dichos funcionarios lo mismo á los particulares que á los jurados y á los que en los Gobiernos Generales de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, prestan el servicio con arreglo al artículo 600 de la Ley de Enjuiciamiento civil mandada publicar por Real Decreto de 25 de Septiembre de 1885 y al 584 de la de 8 de Febrero de 1888, y que es justo que perciban sus honorarios regulados en minuta detallada y firmada conforme determinan los artículos 422 y 406 respectivamente de las Leyes citadas, sin otra limitación que la de no traspasar los derechos que para la Interpretación de lenguas del Ministerio de Estado, señaló la Ley de 22 de Junio de 1880 aumentados en la proporción de real fuerte por real de plata, que es la misma adoptada en los Aranceles aprobados por el

Real Decreto de 18 de Julio último, y con la condición de que si tales derechos fuesen devengados por algún Intérprete retribuido con dotación fija en Presupuesto, ingresen en el Tesoro público en papel de pagos al Estado la mitad de los derechos en la forma prevenida en el artículo 362 de los Aranceles para los Secretarios de las Audiencias, etc., dejándoles la otra mitad por vía de estímulo y gratificación.—Considerando que lo expuesto en la precedente consideración no se refiere ni puede referirse á los traductores de los documentos escritos en cualquiera de los diversos idiomas que se hablan en el archipiélago filipino, los cuales tienen consignados especialmente sus derechos en el artículo 337 de los Aranceles vigentes.—Considerando: que la pretensión de Don Juan Arce, Escribano de Cámara que fué de la Audiencia de Manila, solicitando se le autorice á percibir en metálico los derechos que los mismos le señalan, está fundada en motivos de equidad, puesto que no tenía haber alguno consignado en presupuesto, y que accediendo á su solicitud tampoco se lexionan, los intereses del Estado, toda vez que su plaza fué suprimida por Real orden de 17 de Octubre próximo pasado en que se le nombró Oficial de Sala de la Audiencia de Cebú.—Considerando: que en la publicación de los Aranceles tantas veces citados se cometió una errata en el artículo 91, consignándose 07 céntimos de peso, en vez de 075, errata que fué rectificada en los ejemplares de la GACETA que se remitieron á las provincias de Ultramar, pero sobre lo cual importa llamar la atención para que no haya dudas en la percepción y pago de los derechos correspondientes.—S. M. el Rey [Q. D. G.] y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer:—1º Que procede denegar la pretensión de los Procuradores de la Audiencia de la Habana, en solicitud de que quede en suspenso respecto de los mismos, el título IV de los vigentes Aranceles y de que se les aumente la agencia mensual.—2º Que los Secretarios de Sala de la Audiencia de la Habana puedan percibir para sí, los derechos señalados en los Aranceles, interin no se provea á la dotación de sus auxiliares, escribientes y demás gastos de que se ha hecho mérito.—3º Que no es de estimar lo solicitado por el Tasador de costas, Repartidor de la Audiencia de la Habana, ni lo pretendido por el Tasador de los Juzgados de aquella capital.—4º Que tampoco procede acceder á la reclamación que formula el Tasador de costas de los Juzgados aludidos respecto de los Contadores judiciales, los cuales deberán cobrar los derechos señalados en los artículos 73 y 130 de los Aranceles vigentes.—5º Que así los Fiscales municipales Letrados, cuando desempeñen en los Juzgados de primera instancia de las Antillas las funciones de los extinguidos Promotores fiscales al tenor de lo dispuesto en el artículo 423 del Real Decreto de 5 de Enero de 1891, como los Abogados que según el mismo artículo pueden nombrar los Fiscales de las Audiencias para ejercer iguales funciones, percibirán los derechos siguientes:

1º Por tomar los expedientes, firmar el recibo y hacer los oportunos asientos, los derechos señalados á los Procuradores en el artículo 308 de los Aranceles vigentes.

2º Por devolverlos con escrito ó sin él, cancelar el recibo, asientos y fianza de la nota de presentación, los idem idem en el artículo 309 de los idem idem.

3º Por la vista de cada hoja que necesiten examinar, los idem idem en el artículo 316 de los idem idem.

4º Por cada escrito ó dictámen que presenten, los idem idem en el artículo 299 de los idem idem.

5º Por cada notificación que reciban y firmen, los idem idem en el artículo 303 de los idem idem.

6º Por cada citación y emplazamiento para dictar sentencia, para evacuar pruebas, para elevar actuaciones al Tribunal ó otra semejante, los idem idem en el mismo artículo 303.

7º Por asistencia ó declaraciones, inventarios, juntas, pruebas, reconocimientos, remates y otros actos judiciales, llevarán por hora los idem idem en el artículo 311 de los idem idem.

8º Por cada asistencia cuando no se verifique el acto para el cual fueren citados, llevarán la mitad de los derechos asignados.

9º Cuando el acto tenga lugar fuera del domicilio á la distancia que fija el artículo 319 de los Aranceles vigentes, cobrarán las dietas en dicho artículo señaladas; y

10º Por la presentación de cada testigo, incluso los informes extrajudiciales que ordinariamente procedan, llevarán los derechos consignados en el artículo 314 de dichos Aranceles.

6º Que no corresponde modificar los actuales Aranceles, limitando los gastos que pueda ocurrir en los juicios de testamentaria y ab-intestato.—7º Que los Intérpretes que llenen el servicio de que tratan los artículos 600 y 584 de las Leyes de Enjuiciamiento civil vigentes en las Antillas y Filipinas respectivamente tienen derecho á los emolumentos que para la Interpretación de Lenguas del Ministerio de Estado señaló la Ley de 22 de Junio de 1880, aumentados en la proporción de real fuerte por real de plata.—8º Que al efecto, dichos derechos serán los siguientes:

	Pesos.	Ota.
Por cada hoja de traducción hecha de original portugués ó lemosino.....	2	..
Idem del Francés ó Italiano.....	2	50
Idem del Latín ó Inglés.....	4	..
Idem del alemán, holandés, sueco, danés ó		